

¿Proceso democrático en riesgo?

Por Roberto Rubio-Fabián

Durante los tres gobiernos de ARENA, especialmente en el primero, se presentaron algunos hechos que atentaron contra el naciente proceso democrático: asesinato de algunos dirigentes del FMLN; el hallazgo en Managua (1993) de un arsenal en manos de algunos sectores del Frente; secuestro de empresarios o familiares por parte de personas vinculadas al Partido Comunista; serios cuestionamientos al proceso electoral, etcétera.

A pesar de estos hechos, varios factores contribuyeron a que no se interrumpiera la marcha del incipiente proceso democrático: la frescura de los Acuerdos de Paz, la vigilancia de la comunidad internacional y presencia in situ de Naciones Unidas (ONUSAL), la percepción de las élites empresariales que sus ganancias iría mejor con el ejercicio democrático (o con una democracia vigilada), poder estatal menos concentrado, contrapeso político del FMLN y su creciente presencia en la Asamblea Legislativa. Estos factores, entre otros, contribuyeron a evitar cualquier aventura anti democrática.

Contrario a los gobiernos anteriores, durante el gobierno de Saca presenciamos una concentración del poder estatal en manos del Ejecutivo. La presidencia Saca consumó el misterio de la Santísima Trinidad hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial eran tres poderes distintos en un solo poder verdadero, el poder del Presidente. Hacia adentro, se consumaban tres personas distintas: Presidente del partido, poder del capital y Presidente de la República, en un solo líder verdadero. Esto dio pie a que el FMLN catalogara al gobierno de "dictadura civil". Algo que favoreció que algunos sectores del Frente propugnaban la lucha de calle y vuelta a la lucha armada (recordemos a la Brigada Limón). Felizmente, estas aventuras anti democráticas del 2006 sucumbieron ante el

LPG



rechazo generalizado de la comunidad internacional y nacional. Y el proceso democrático siguió adelante.

Durante los gobiernos del FMLN experimentamos serios intentos de fracturar nuestro proceso democrático. Ahí está el mal recordado decreto presidencial 743 tratando de anular la incómoda Sala de lo Constitucional, o la histórica y lamentable foto del Presidente de la Asamblea Legislativa levantando la mano del ilegalmente autonombrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ovidio Bonilla. La opinión pública, los medios de comunicación, el activismo ciudadano y la presión de la comunidad internacional, contribuyeron a superar tal ruptura democrática. El FMLN comprendió que no había condiciones/espacio para sus proyectos autoritarios de desmontar la democracia burguesa.

En estos años, ni ARENA ni el FMLN pudieron contener el despliegue de nuestro frágil proceso democrático. Sin embargo, ahora son otros tiempos y los riesgos son más elevados.

El actual gobierno no tiene mayores contrapesos institucionales y sociales; la oposición es débil; importantes medios tradicionales de comunicación han reducido su crítica periodística; gremiales empresariales actúan con tímida complacencia; la CSJ y la Fiscalía no aparecen como relevantes contrapesos al poder gubernamental; la popularidad del Presidente, por el momento, es alta. En pocas palabras, no hay mayores contrapesos institucionales, elemento esencial del proceso democrático (aunque algo de contrapeso ciudadano existe).

Ante ese contexto, preocupa mucho que ciertas señales gubernamentales que por el momento aparecen como simples hechos aislados, se conviertan en comportamientos/tendencias políticas que puedan derivar en una seria amenaza a nuestra incipiente democracia: uso discrecional del aparato gubernamental en contra de una específica e incómoda empresa, limitaciones a la libertad de expresión, prohibiciones a conferencias de prensa a medios críticos, presión a medios a través de la pauta publicitaria, estímulo a la confrontación y violencia en redes sociales, órdenes de despido/supresión de

plazas sin respeto a los procedimientos legales, insinuaciones de disolución de la Asamblea Legislativa, etcétera.

La concentración del poder no es sana para la democracia, no importa el signo político/ideológico del gobierno, o de si me cae bien o no éste. Menos sano lo es cuando existe poca convicción en la institucionalidad democrática. Ojalá se entienda que esto no le conviene a nadie, ni al mismo gobierno y su presidente. Demasiadas experiencias en la historia de la humanidad así lo evidencian. Demasiada sangre nos ha costado contar con esta incipiente democracia.